

Reflexiones complementarias

Foro Digital de Política Exterior La Paz-Lima-Santiago-Bogotá-Quito-Caracas-Buenos Aires -Montevideo-San Pablo- CDMX-La Habana.

América Latina: Impacto económico y político de la pandemia

Universidad Católica Boliviana
Instituto de Estudios Internacionales
Mayo 2020

Crisis política.

El horizonte político latinoamericano está encapotado.

Las crisis – sanitaria, económica, política y ambiental— que atraviesan transversalmente el territorio de América Latina son interconectadas y simultáneas, no solo en el plano nacional, que es el nivel habitual de análisis, sino en el regional. Lo que ocurre en un país afecta, casi de manera inmediata, a los demás. Para poner un ejemplo, la crisis política brasileña, la crisis económica argentina, la incertidumbre social y política chilena y peruana, gravitarán en la evolución económica, social y política boliviana, con tanta o mayor fuerza que la confrontación geopolítica global entre Estados Unidos y China.

Se anticipa, prevé, en todas partes, que el colapso económico, la parálisis de casi 100 días, el notable incremento de la desocupación y la pobreza, la falta de ingresos y la incertidumbre y temor de la pandemia, provocarán intensa agitación social, en un ambiente poco favorable al diálogo. La paja está seca.

La sociedad llegará con nuevas demandas, producto de la experiencia de estos meses. Tomará posición preeminente el debate sobre el paradigma de desarrollo y el cuidado y preservación del medio ambiente. En el mismo o mayor rango de importancia, se exigirán educación, salud, transporte, como bienes públicos, una vez que quedó claro que esos sectores, no solo estratégicos sino vitales, no pueden ser administrados y provistos exclusivamente por el sector privado, que amplían la desigualdad y la concentración del ingreso y las oportunidades, como lo ha demostrado la experiencia.

La emergencia sanitaria demostró que el Estado es insustituible para administrar una crisis de esa magnitud. Solo él puede coordinar los instrumentos jurídicos, financieros, institucionales, de seguridad pública, que se requieren para enfrentarla en sus manifestaciones económicas, sociales y políticas. Pero también puso en evidencia que si ese Estado no es competente, honesto y democrático, se corren riesgos intolerables de autoritarismo, corrupción, abuso, concentración del poder y de la riqueza.

Ese es nuevo frente del debate, que lleva a la disección de la profunda crisis del sistema de intermediación y representación en América Latina, sin organizaciones partidarias

dignas de ese apelativo y estigmatizado por la falta de escrúpulos, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado. El resultado es el desprestigio del sistema político y del rechazo de la sociedad a los partidos y, lo que es más grave, a las propias instituciones del Estado democrático. Durante la crisis sanitaria, sin embargo, se destacó el papel de las autoridades locales, con mayor legitimidad y apoyo que los gobiernos nacionales, como una pequeña luz al final del túnel.

Esos rasgos son comunes al sistema político regional, pero, a partir de ese trasfondo, se distinguen diferencias significativas, con pronósticos nacionales divergentes, que dependen de las matices, características, tradición y estructuras propias de cada sociedad, como se puede observar en la siguiente recapitulación.

Primer grupo.

En estos países –Uruguay, Colombia, Argentina-- los Gobiernos se fortalecieron con la pandemia. La respuesta apropiada a la emergencia recibió apoyo de la ciudadanía. Las fuerzas de gobierno y oposición tienen estructuras y posibilidades definidas y las inevitables tensiones se administran dentro del sistema democrático.

En el Uruguay, la respuesta ágil y sensata a la pandemia del Gobierno recién electo, con una cuarentena voluntaria muy efectiva, contó con altos índices de aprobación popular y moderó el impacto del coronavirus. El gobierno de coalición, de derecha, que ganó con el 56% de los votos, tiene problemas de articulación. El Frente Amplio pasa a la oposición con 40%.

En Colombia, la emergencia del Covid-19 permitió al Gobierno recuperar iniciativa y popularidad (nació débil y controvertido, pero pasó del 23% al 53% de aprobación). En la primera parte de la emergencia, las autoridades locales, especialmente Claudia López, Alcaldesa de Bogotá, asumieron protagonismo, ante el desconcierto del gobierno central. Mas adelante, el Presidente Duque retomó control, cambió el énfasis de la recuperación económica a la prioridad de las políticas de salud; emitió directrices de carácter nacional y proporcionó información diaria y pedagógica a la población. La emergencia le dio a Duque la agenda que le faltaba y le permitió conectarse con la sociedad, mas allá de su proximidad con los empresarios. Todo indica que Duque quiere aprovechar el repunte y el desinterés de la comunidad internacional, preocupada con otros problemas, para retomar su campaña contra los acuerdos de paz y “recauchutar” el *uribismo*. El reciente escándalo de una operación armada irregular en Venezuela, con mercenarios entrenándose en la Guajira y participación del Ejército en esos planes, marca también el re-endurecimiento de su política con el vecino.

Como ya se ha visto, la crisis argentina --inflación, endeudamiento, pobreza, corrupción, crimen organizado-- viene de lejos, sin embargo, las elecciones de 2019 generaron un ambiente participativo, democrático, que evitó una fuerte explosión social. La emergencia sanitaria dio orientación y sentido al Gobierno de Alberto Fernández y multiplicó su capacidad de gestión. Su popularidad alcanzó cotas cercanas al 90% y facilitó un clima de articulación con gobernadores, intendentes y alcaldes (muy en especial el de la ciudad de Buenos Aires). La salida de la pandemia planteará un escenario menos consensual. La posición dividida y desmantelada, tratará de aprovechar los problemas económicos y sociales derivados de la emergencia del coronavirus y, sobre todo, de la reestructuración de la deuda externa, para cohesionarse para los

procesos electorales de 2021. En el gobierno, a su vez, tomarán estado público las diferencias entre los bloques radical y moderado del peronismo, con la mirada puesta en esos comicios.

El caso de México es distinto. La respuesta a la emergencia fue equivocada, contradictoria y tardía y no ayudó la insuficiencia y precariedad de las instituciones de salud. El apoyo al presidente López Obrador cayó 20 puntos y quedaron expuestas las diferencias en su propio equipo de gobierno; las tensiones crecientes con los empresarios; las fricciones del Gobierno Federal con los Estados y sus autoridades; el crecimiento de los índices de violencia y de inseguridad y, curiosamente, el aumento notorio de la militarización, con la participación de militares, no solo en temas de seguridad interna sino de política sanitaria. No obstante, todo indica que los problemas políticos que plantea ese cuadro se debatirán en el marco del sistema democrático. Por eso lo incluyo en este grupo.

Segundo grupo.

En Ecuador, Bolivia, Chile, se arrastran severas crisis no resueltas, agravadas por la pandemia, que anuncian transiciones políticas más demoradas, complicadas y riesgosas.

El impacto de la pandemia en Ecuador fue muy fuerte, sobre todo en Guayaquil y creó un clima de inseguridad y temor que, a su vez, provocó una confrontación política y mediática muy intensa. Lentamente, la situación sanitaria se fue equilibrando, pero no el ambiente social extremadamente exacerbado desde octubre de 2019. La perspectiva de aumento de la pobreza, de la desocupación y de agitación social, como efecto de la cuarentena –que, como en otros países, fue discutida por los empresarios que preferían mantener la economía en funcionamiento--, unida a la pésima situación financiera del país por el endeudamiento externo y la fuerte caída de los precios del petróleo, plantea muchos interrogantes sobre el curso de la lucha política en el proceso de las elecciones presidenciales del año próximo.

La pandemia se sumó y añadió nuevos factores conflictivos a la crisis desencadenada en Bolivia en octubre de 2019, por el fraude electoral, la movilización de jóvenes en todas las ciudades, la renuncia y huida de Morales, el vacío de poder, un gobierno de transición frágil, sin base política, confrontado a un Congreso con mayoría del MAS. Jeannine Añez embrolló más las cosas al actuar como gobierno con mandato y plantear su propia candidatura. Sin concertación nacional para enfrentar la pandemia, con un sistema de salud estructuralmente deficiente, acosado por denuncias de corrupción, el Gobierno impuso una cuarentena dura, con apoyo urbano y resistencia de la periferia (empujada por el MAS). En esas condiciones se llegará a las elecciones convocadas para el 6 de septiembre, con impasse entre los 4 poderes del Estado (Congreso controlado por el partido derrocado), Tribunal Electoral de consenso y Tribunal Constitucional de dudosa legitimidad y comportamiento. El escenario es incierto.

Algo semejante ocurrió en Chile, con sus propias características, desde luego. El país se encaminaba a un plebiscito constitucional consensuado en la hoguera del estallido social de 2019, cuando llegó la pandemia. El manejo adecuado de la emergencia y la personalidad de las autoridades sanitarias estabilizaron temporalmente el Gobierno. El apoyo al Presidente Piñera se duplicó (de 10% a 20%), se aplicó un plan económico de emergencia, con subsidios a trabajadores informales, apoyo a Pymes, reprogramación

deudas. Sin embargo, cuando las expectativas de flexibilización se frustraron por el recrudecimiento de contagios y fallecimientos y fue necesario implantar nuevamente un aislamiento rígido en la Región Metropolitana (la batalla de Santiago), cambió la sensación térmica. La oposición, sin liderazgo -- separada por dos lógicas, la confrontacional de octubre o la de colaboración en la crisis sanitaria— y la coalición de gobierno dividida, tendrán que enfrentar una agenda electoral muy apretada, sin claridad sobre los cambios de paradigma que la sociedad reclamó en las calles.

Tercer grupo.

Los dos últimos casos se refieren a crisis políticas severas, que ponen en tensión (Brasil) o riesgo (Venezuela) el propio sistema democrático.

La emergencia del coronavirus parece en Brasil fuera de control (con contagios cercanos a 800.000 y más de 35.000 fallecidos), a la que debe sumarse la posibilidad que se repitan los gravísimos incendios de la Amazonía del año pasado. En ese ambiente de temor, suspicacia e incertidumbre, con la popularidad de Bolsonaro en picada (de 48% a 29% de los encuestados), se incubó una confrontación política en todos los niveles: federativo (Presidente contra Gobernadores), Constitucional (Presidente contra Poder Judicial y Congreso), dentro de la coalición de gobierno (despido de los Ministros Mandetta y Moro). El Presidente asumió una actitud provocativa (declaró que la población debe armarse para enfrentar el comunismo y uno de sus Ministros pidió que se apresara a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia) y dejó en duda el rol institucional de las Fuerzas Armadas. La ruta del juicio político tampoco parece viable en las circunstancias actuales. Como se puede ver, no parece posible una solución democrática próxima de ese conjunto de dificultades y dilemas.

La frase con la que empezó su intervención el profesor Carlos Romero, encapsuló el drama que vive Venezuela: “agradezco que la Dra. Nora Fischman me haya recibido en su casa porque no tengo agua, no tengo luz, no tengo internet, no tengo gasolina”. La emergencia sanitaria relativamente menor, oculta los problemas de fondo de su país. Todo el mundo está en su casa porque no tiene gasolina, no tiene agua, no tiene electricidad y no tiene trabajo. El país está paralizado desde hace tiempo, la economía dolarizada mejoró la oferta pero contrajo brutalmente la demanda. Los que quedaron planean cuando irse. Universidades cerradas, sin conexión digital, sin presencia física. Pero, la culpa no es exclusiva del gobierno. La oposición perdió vigencia social. No hay partidos, no hay políticos, no hay democracia, ni vida social. Las opciones tampoco muestran salidas, sino nuevos laberintos: status quo, inercial; cambio de régimen, dictadura abierta.

Por cierto, el caso de Cuba es distinto al de los otros países latinoamericanos. Su clara ventaja comparativa en medicina (la posibilidad de muerte de enfermedades transmisibles es muy baja) y la experiencia de sus brigadas médicas en África, facilitaron el control de la pandemia. Pero hay otros problemas. El endurecimiento de la política norteamericana, el aumento del cerco económico y la disminución de remesas (entre ellas, las que remiten los médicos cubanos en el exterior) se deja sentir, con escasez de combustibles y dificultades en seguridad alimentaria, en una economía en la que el sector privado ya representa casi un tercio de la actividad. El país está embarcado en un proceso de cambio del liderazgo político (en promedio, treinta años

menor que el del pasado reciente) con un diálogo con la sociedad crecido por la presencia de los funcionarios en la televisión para informar sobre el avance de la lucha contra la pandemia y por el rol de las autoridades locales, en un proceso de descentralización importante. Sin embargo, la demora en la aprobación y ejecución de las reformas que impulsa --ley de empresas, ley de tierras, ley de comunicación y prensa—, puede afectar su legitimidad y credibilidad. Una navegación compleja para un país entrenado en mares mas tormentosos.

Conclusiones

A partir de todo lo mencionado, cabe concluir con una de las interrogantes planteadas al final de la segunda mesa de discusión, *¿En qué dirección puede darse el cambio?* Para lo cual se sugirió: *“Se debe ver el cuadro completo: la crisis ambiental, de salud, económica y política”*. Al respecto, se reiteraron tres puntos clave para continuar el análisis sobre la coyuntura actual:

1. **Democracia, estado, autoridad y poder.** Este punto está relacionado con una tendencia en la región por un potencial uso desmedido del poder en los gobiernos centrales. Tal es el caso expresado en Brasil y Venezuela. Llama la atención que en el primero, se advierta que grupos de ciudadanos demandan una posible militarización del país sudamericano. Mientras que en el segundo, la concentración del poder en el gobierno central, se ha consolidado por la debilidad de la oposición venezolana.

Sobre el futuro de la democracia, cabe mencionar el análisis de Matías Spektor sobre el tipo de democracia que se ha implementado en estas décadas y la necesidad de un análisis crítico al respecto para poder sostener este tipo de sistema político en la región.

Asimismo, este punto está relacionado con una creciente tensión entre los gobiernos locales y nacionales. Se expresó esta situación en el caso de Brasil, México y Colombia. Esto marca una pauta para motivar posibles acuerdos entre los distintos niveles del sistema político, con el fin de enfrentar los retos que tiene la región.

Finalmente, en relación a este punto, habrá que considerar cómo se responderán a las demandas de la sociedad civil, que han expresado su descontento en los casos de Bolivia, Chile y Ecuador. La demanda general es por un nuevo sistema político y social. *¿Cómo construirlo?* Esa es una de las preguntas de fondo que se podrían considerar.

2. **Nuestros procesos están interconectados.** En las dos mesas de análisis, se pudo evidenciar la interconexión de las realidades locales con un contexto regional compartido. Cada país tiene particularidades que caracterizan su realidad; sin embargo, se ha evidenciado una serie de similitudes, entre unos casos y otros, que refleja la necesidad de considerar el futuro de manera regional, articulada y coordinada.

¿Cómo construir políticas de integración regional que permitan atender las demandas de esta década que inicia con una compleja crisis sanitaria? Podría ser una de las interrogantes a tratar en futuros encuentros.

- 3. Tema medio ambiental:** Este punto ha sido considerado en el caso particular de la amazonía colombiana y los grupos de indígenas que residen ahí. Pero es una situación que influye a todo el cono sur. Las condiciones sociales, políticas y económicas que se han discutido expresan que la tensión entre el paradigma de desarrollo y medio ambiente no se puede disimular más.

Asimismo, se insistió que la crisis de la pandemia atravesada por una crisis económica no puede ser resuelta sin considerar la necesidad de un nuevo paradigma de desarrollo que pueda reinventarse en función a la situación actual.

¿Qué características debería tener el mismo y cómo articularlo con las demandas de los distintos sectores sociales para poder trabajar una agenda colectiva de desarrollo sostenible? Podría ser una forma de iniciar futuros debates sobre este punto.